

Santiago, cuatro de abril de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

En estos autos Rol N° 5.334-2021, caratulados "*Acevedo Berríos Wilibaldo con Estado de Chile*", el demandante dedujo recurso de casación el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 19 de noviembre de 2020, que confirmó la sentencia de primera instancia pronunciada el 31 de enero de 2019 por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios.

En la especie, don Wilibaldo Florián Acevedo Berrios dedujo la acción antedicha en contra del Estado de Chile, identificando como hecho dañoso la certificación efectuada por el Secretario del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, en el marco de un juicio ejecutivo especial hipotecario iniciado en contra del actor por el Banco Santander y tramitado según el procedimiento reglado en la Ley General de Bancos, atestado que dio cuenta de no haberse presentado excepciones al remate, pese a que el actor opuso oportunamente la excepción de pago que fue resuelta favorablemente para el ejecutado nueve años después del remate concretado gracias a aquella certificación errónea.

Explicó que, el 8 de junio del año 2000, el Banco Santander dedujo en su contra la acción ejecutiva referida,



dando origen a la causa Rol N° 2.426-2000 de ingreso ante el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago. En tal procedimiento la entidad bancaria pretendía el pago de 400,165 Unidades de Fomento adeudadas por don Wilibaldo Acevedo como saldo insoluto de un mutuo con garantía hipotecaria constituida sobre el inmueble denominado "Lote N°3", ubicado en calle 8 Sur, entre 18 y 19 Oriente, comuna de Talca.

Indicó que, el 18 de mayo de 2002, opuso en tiempo y forma la excepción prevista en el artículo 103, numeral 1° de la Ley General de Bancos, esto es el pago de la deuda. Respecto de esta presentación, el 13 de junio de 2002 el tribunal confirió traslado, y, vencido el plazo para el ejercicio de tal carga procesal, el 19 de junio de 2002 el ejecutante solicitó tener presente las consideraciones que indicó.

Agregó que, el 26 de abril de 2004, pese a lo descrito en el párrafo precedente y sin mediar resolución de la excepción de pago, el Banco Santander requirió al tribunal certificar la no oposición de excepciones. Tal solicitud fue acogida mediante la resolución de 20 de abril de 2004, y concretada en la certificación de 8 de junio de 2004 que expresó: *"Certifico que el demandado no ha opuesto excepciones dentro del plazo que se encuentra vencido"*.



Refirió que, gracias a aquella actuación, el 2 de agosto de 2004 se llevó a efecto el remate del inmueble hipotecado, adjudicado en pública subasta al propio ejecutante en \$7.700.000 (450,472 Unidades de Fomento de aquella época).

Sostuvo que, el 29 de marzo de 2005, el ejecutado dedujo un incidente de nulidad del remate, artículo que, si bien fue rechazado por el tribunal de primera instancia, fue finalmente acogido en alzada, ordenando, los jueces de segundo grado, la retrotracción del procedimiento al estado de emitir pronunciamiento sobre la excepción de pago.

Preciso que, no obstante, el 9 de octubre de 2012, el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago rechazó la solicitud del actor en orden a cancelar la inscripción de dominio a nombre del banco, justificando la denegación en la tradición del inmueble a un tercero que no era parte del juicio. Esta resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 18 de junio de 2013.

Describió, finalmente, que el 29 de agosto de 2013 el tribunal de primer grado acogió, con costas, la excepción de pago opuesta por el actor, previa constatación de que, a la época del requerimiento, el ejecutado se encontraba al día en las cuotas del mutuo que se cobraba.

Propuso que la errada certificación importa una infracción a lo dispuesto en el artículo 379 del Código



Orgánico de Tribunales, yerro que, siendo calificable como falta de servicio, posee una evidente relación causal con el remate del inmueble y, consecuentemente, con el daño generado en su contra. En este punto, el demandante acotó expresamente que no se trata de un "error judicial" de aquellos mencionados en la Carta Fundamental, ni de falta de servicio del Estado Administrador, sino que resulta procedente la proyección de la falta de servicio administrativa al quehacer de los órganos judiciales, ante su funcionamiento anormal, de la manera como lo ha resuelto esta Corte Suprema respecto de la responsabilidad del Estado por conductas de las Fuerzas Armadas, en aplicación de lo previsto en los artículos 2314, 2316, 2320, 2322 y 2329 del Código Civil.

Aseveró haber padecido daño material "directo", merma que tasa en \$80.000.000 por el valor del inmueble que le fue despojado, y \$10.800.000 por las rentas de arrendamiento que ha debido solventar desde septiembre de 2010. Del mismo modo, propuso la generación de daño material "indirecto", avaluado en \$10.000.000, por concepto del pago de honorarios y otros desembolsos realizados a raíz del hecho dañoso. Por último, alegó haber soportado daño moral, que estimó en \$350.000.000, debido a la alteración de su vida familiar y la pérdida de su calidad de vida, puesto que debió residir como allegado en la



casa de su madre luego de la pérdida del inmueble hipotecado, junto a su cónyuge y sus tres hijos, condición de hacinamiento y pérdida de credibilidad que derivó en la ruptura de su relación matrimonial, viéndose sumido en un cuadro de angustia que perduró durante los diez años que tardó el tribunal en resolver la excepción de pago.

Solicitó, en lo conclusivo del libelo, que se declare:

- (i) Que el actuar del Secretario del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago fue negligente y provocó daño al actor;
- (ii) Que el remate de la propiedad hipotecada adolece de vicios de ilegalidad al tenor de la propia sentencia recaída en la causa en comento;
- (iii) Que el Estado de Chile es responsable por los daños ocasionados;
- (iv) Que se condena al Estado de Chile a pagar la indemnización antes indicada, o la cantidad que se considere en justicia; y,
- (v) Que se condena al demandado a pagar las costas de la causa.

Al contestar, el Consejo de Defensa del Estado instó por el rechazo de la demanda, en todas sus partes, en virtud de las siguientes alegaciones y defensas: (i) La improcedencia de la acción, explicando que la falta de servicio, como criterio de imputación, se encuentra reglada en el artículo 42 de la Ley N° 18.575, regla que, según lo previsto en el inciso 2° del artículo 1° de dicho cuerpo normativo, es aplicable únicamente a los órganos de la Administración del



Estado, categoría que no comprende a los Tribunales de Justicia, estamento que se encuentra sujeto al régimen de responsabilidad por error judicial previsto en el artículo 19, numeral 7° de la Constitución Política de la República, figura que tampoco es aplicable al caso concreto por haberse sustentado la acción indemnizatoria en la conducta del Secretario de un tribunal civil; (ii) La ausencia de relación causal, si se considera que frente a una certificación errónea el litigante agraviado contaba con diversos remedios procesales que, de haber sido utilizados diligentemente, habrían permitido la corrección del curso de juicio, de modo que no concurre la razonable proximidad entre el hecho que se reputa como dañoso y el acaecimiento del daño; (iii) El incumplimiento del deber de mitigación exigible al actor, por cuanto, atendido lo dicho en el románico precedente, el ejecutado, estando en condiciones de hacerlo, no realizó las acciones mínimas necesarias para evitar el supuesto daño, al no emplear los medios procesales para impedir su aparición; (iv) La inexistencia o el exceso de la indemnización que se pretende; y, (v) La prescripción de la acción indemnizatoria ante la evidente expiración del plazo de cuatro años previsto en el artículo 2332 del Código Civil entre la certificación errónea, de 8 de junio de 2004, y la notificación de la demanda, el 14 de julio de 2017.



La sentencia de primera instancia rechazó la demanda en todas sus partes, con costas, conforme a la siguiente línea argumental: (i) Determinó que son hechos no controvertidos la existencia de la certificación, del remate, del incidente de nulidad y su resultado; (ii) Expresó que, por consiguiente, la controversia se centra en la existencia de negligencia en el actuar del Secretario del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, la existencia y naturaleza de los perjuicios, la concurrencia de la relación de causalidad, y el acaecimiento de hechos constitutivos de interrupción natural o civil de la prescripción alegada por el demandado; (iii) Concluyó, respecto de la excepción de prescripción extintiva, que el plazo para su operación debe computarse desde que el actor tuvo certeza "acerca de la producción de los daños", hecho que ocurrió el 4 de noviembre de 2013, al momento de certificarse la ejecutoria de la resolución de 29 de agosto de la misma anualidad que acogió la excepción de pago, de modo que, a la época de la interrupción del término de prescripción mediante la notificación de la demanda, el 14 de julio de 2017, la acción no se encontraba prescrita; (iv) Manifestó, en lo atinente al fondo de la controversia, que el actor encausó incorrectamente la fundamentación de derecho de su demanda en lo previsto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, estatuto inaplicable a la



conducta de un tribunal "en su calidad de servicio público de administración de justicia" que no se encuentra excluido del sistema consagrado en la Ley N° 18.575, por no mencionarlo de ese modo el inciso 2° de su artículo 21, máxime si se considera que la función del órgano específico de que se trata no es sólo jurisdiccional, que puede generar responsabilidad por error judicial, sino que se extiende al orden administrativo, que puede derivar en responsabilidad por funcionamiento anormal; (v) Omitió pronunciamiento sobre las restantes alegaciones y defensas; (vi) Precisoó que, en todo caso, la excepción de infracción al deber de mitigación debe ser rechaza por carecer de consagración positiva y por oponerse al deber primario de no causar daño; y, (vii) Explicitó que existió demora en el actuar del tribunal y mala fe por parte del banco ejecutante, quien solicitó la certificación pese a haberse opuesto a la excepción de pago.

Apelada únicamente por el demandante, la sentencia de primer grado fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, precisando que, cualquiera sea el estatuto de responsabilidad aplicable, la demanda debe ser rechazada por no haberse acreditado fehacientemente el daño cuya reparación se pretende.

Respecto de esta decisión la demandante dedujo recurso de casación en el fondo.



Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, al conocer este tribunal del presente asunto por la vía del recurso de casación interpuesto, encontrándose el proceso en estado de acuerdo, ha advertido que la sentencia podría adolecer de un vicio de aquellos que dan lugar a la casación en la forma y respecto de los cuales el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil autoriza para proceder de oficio.

SEGUNDO: Que, en estos autos, don Wilibaldo Florián Acevedo Berrios ha deducido demanda indemnizatoria en contra del Estado de Chile, solicitando la reparación de los perjuicios sufridos con motivo de la errónea certificación de no oposición de excepciones, actuación efectuada por el Secretario del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago en el marco de un juicio ejecutivo especial hipotecario iniciado en contra del actor, quien había opuesto la excepción de pago en tiempo y forma, yerro que derivó en el remate del inmueble hipotecado pese a que, a la fecha del requerimiento, la obligación se encontraba solventada, tal como se constató con posterioridad en la resolución que acogió la defensa antes indicada. En su libelo, el demandante calificó aquella circunstancia como constitutiva de falta de servicio, criterio de imputación de responsabilidad que, si bien no



sería aplicable a los órganos de la administración de justicia directamente por la Ley N° 18.575, es extensible a ellos acudiendo al régimen general, previsto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

TERCERO: Que la sentencia de primer grado rechazó íntegramente la demanda teniendo en consideración que el Poder Judicial, en su calidad de servicio público de administración de justicia, queda sujeto al sistema de responsabilidad aplicable a tales servicios, conforme a lo reglado en el artículo 42 de la Ley N° 18.575, cuyo artículo 21, inciso 2°, no excluye a esta repartición del Estado. Por ello, concluyó que el estatuto de derecho privado invocado por el demandante resultaba inaplicable al caso concreto y, por esa única razón, desestimó la acción.

En contra de dicha determinación el demandante dedujo recurso de apelación, procediendo, el tribunal de alzada, a confirmar el laudo recurrido sin alterar su contenido, agregando que, a su parecer, los daños cuya reparación se pretende no fueron acreditados.

CUARTO: Que de lo reproducido más arriba se advierte que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal prevista en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con su artículo 170 N°4, al omitir toda consideración respecto de los requisitos de procedencia de la



acción indemnizatoria, salvo la breve referencia al daño contenida en el laudo de segundo grado.

En efecto, en estos antecedentes el actor no sólo detalló cabalmente la posición de hecho que justificaría su pretensión indemnizatoria, en tanto usuario del servicio de administración de justicia que desvió su actuar, sino que, además, esgrimió correctamente el criterio de imputación que resultaba aplicable al caso concreto, consistente en la falta de servicio, tal como fue reconocido por los jueces del grado.

QUINTO: Que, sobre el punto, preciso es consignar que, como lo ha resuelto esta Corte en reiteradas oportunidades, para resolver el asunto sometido a su decisión los tribunales están facultados para revisar el derecho aplicable, siempre que ello se encuentre conforme y congruente con los presupuestos fácticos de la pretensión intentada. Ello en aplicación del principio *iura novit curia*, en el sentido que el juez conoce y aplica el derecho, sin que tal ejercicio afecte la causa de pedir. Así, el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, sino sólo a sus fundamentos de hecho.

SEXTO: Que, entonces, los jueces del grado, una vez que arribaron a la convicción de que el criterio de imputación aplicable a la responsabilidad del Estado con motivo de



haberse practicado una errada certificación en el marco de un juicio civil era la falta de servicio, se encontraban impedidos de rechazar la demanda bajo pretexto de haber errado, el demandante, en las citas legales mencionadas en la demanda, puesto que, como se adelantó, la aplicación correcta del derecho al caso concreto constituye un deber del juez, con independencia de las propuestas formuladas por las partes. Así, sobre los jurisdicentes pesaba la obligación de expresar en el fallo las consideraciones de hecho y de derecho aplicables a los requisitos de procedencia de la acción indemnizatoria. Al no haberlo hecho han incurrido en la causal de casación mencionada precedentemente.

SÉPTIMO: Que lo expuesto autoriza a esta Corte, al no existir otro medio idóneo para corregir la deficiencia procesal comprobada, para casar de oficio la sentencia de segunda instancia por adolecer del vicio que se hizo notar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 768, 775 y 786 del Código de Procedimiento Civil, **se casa de oficio** la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que por consiguiente **es nula** y es reemplazada por la que se dicta a continuación.



Atendido lo resuelto, es innecesario pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación folio N° 619736-2020.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Carroza.

Rol N° 5.334-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Águila Y. No firman los Ministros Sra. Vivanco y Sr. Carroza, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos haciendo uso de su feriado legal. Santiago, 4 de abril de 2023.

SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO
MINISTRO
Fecha: 04/04/2023 16:58:15

ADELITA INES RAVANALES
ARRIAGADA
MINISTRA
Fecha: 04/04/2023 16:58:16

PEDRO HERNAN AGUILA YAÑEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/04/2023 16:58:17



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Adelita Inés Ravanales A. y Abogado Integrante Pedro Aguila Y. Santiago, cuatro de abril de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de abril de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, cuatro de abril de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo prevenido en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos décimo a duodécimo, decimosexto y decimoctavo, que se eliminan.

Asimismo, se reproduce lo expositivo y los considerandos quinto y sexto de la sentencia de casación que antecede.

Y se tiene además presente:

Primero: Que, tal como se narró en extenso en el fallo de nulidad, expresamente reproducido para estos efectos, don Wilibaldo Florián Acevedo Berrios dedujo demanda indemnizatoria en contra del Estado de Chile, solicitando la reparación de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos con motivo de la errónea certificación de no oposición de excepciones efectuada en el marco de un juicio ejecutivo especial hipotecario iniciado en su contra, actuación ejecutada omitiendo que el señor Acevedo Berrios había opuesto excepción de pago en tiempo y forma, error que derivó en el remate del inmueble hipotecado pese a que, a la fecha del requerimiento, la obligación se encontraba íntegramente solventada, tal como se declaró con posterioridad en la resolución que acogió aquella defensa. Tal error fue calificado por el demandante en su libelo como constitutivo de falta de servicio.

Segundo: Que el demandado instó por el rechazo de la demanda, esgrimiendo: (i) La improcedencia de la acción por



no ser aplicable la noción de falta de servicio a los Tribunales de Justicia; (ii) La ausencia de relación causal, en atención a las diversas herramientas con las que contaba el ejecutado para obtener la enmienda de la certificación errónea, mecanismos que, en la especie, no empleó; (iii) El incumplimiento del deber de mitigación exigible al actor, reiterando lo descrito en el románico precedente; (iv) La inexistencia e inexactitud de las indemnizaciones demandadas; y, (v) La prescripción de la acción indemnizatoria.

Tercero: Que, sobre la excepción de prescripción, resulta preciso recordar que, habiendo sido ella rechazada en la sentencia de primer grado, tal aspecto de la decisión no fue impugnado por el Consejo de Defensa del Estado por vía de apelación, único agraviado habilitado para hacerlo. Por ende, debe entenderse que la defensa fiscal se ha conformado con la decisión de la jueza a *quo*.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, del contraste entre las piezas esenciales de la etapa de discusión queda en evidencia que el primer asunto a analizar consiste en la aplicabilidad del régimen de responsabilidad por falta de servicio a las conductas dañosas desplegadas por los Tribunales de Justicia y, en la afirmativa, la fuente de la que emana tal aplicación.

Quinto: Que, como se ha hecho constar en ocasiones anteriores (Vg. SCS Roles N° 94273-2020, 7410-2019, 12221-2017, 70561-2016, 68835-2016, 42433-2016, 4043-2013, 1577-2013, y 9820-2011, entre otras), en lo relativo a la generación del Derecho, se han establecido diversos sistemas jurídicos que tienen sus raíces en el *common law*, en el



derecho continental romano-germánico, o en directrices religiosas. La preocupación fundamental de todos ellos ha sido el establecimiento del Derecho y la seguridad jurídica derivada de la unidad de criterios en las decisiones de los tribunales. Estos factores de creación y aplicación del Derecho se confunden en el caso del *common law*, en que ambas facultades se radican principalmente en los tribunales, a diferencia de lo que ocurre en el derecho continental, al que adscribe nuestro sistema, en que la generación de fuentes del derecho vinculantes se desarrolla por instituciones y de manera claramente separada: las normas legales emanan del Parlamento y la aplicación de ellas -dictadas con anterioridad a la acción judicial- se efectúa por los Tribunales, con efectos relativos sólo para el caso concreto. Es, por ende, un Derecho escrito, dado fundamentalmente por el Parlamento.

La Revolución Francesa permitió pasar de un Estado de Policía a un Estado de Derecho, entre cuyos efectos más importantes está la conformación de un sistema normativo que tiene por objeto regular la organización del Estado, sus funciones y potestades, como también, las limitaciones y responsabilidades de las autoridades y agentes públicos.

El cambio fundamental se observa en el tránsito de la regla de la exención de responsabilidad de la autoridad estatal, derivado de la inmunidad de la corona conforme a la regla "*The king can do no wrong*" (el rey no puede cometer ilícito), hacia el principio de la responsabilidad de todas las autoridades y particulares al interior de la República,



sin excepción, que emana de la igualdad ante la ley en un Estado democrático y de derecho.

Sexto: Que, en el desarrollo del Derecho de la Responsabilidad del Estado, observamos cómo, a partir de un contencioso-administrativo de legalidad u objetivo que contemplaba la posibilidad de anular la actuación de la autoridad, se llegó a sustituir la determinación mediante una decisión de reemplazo, incluso aplicando sanciones. En un primer estadio se excluyó de control la oportunidad, el mérito y la conveniencia. Sin embargo, por aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, se ha llegado, actualmente, a contemplarlas.

Del mismo modo, del contencioso-administrativo de plena jurisdicción, de derechos o subjetivo, ligado principalmente a la lesión de derechos, en que se busca básicamente una declaración indemnizatoria, se ha transitado hacia una competencia de mayor amplitud, denominada de restauración, que tiene por objeto atender en todos sus contornos de los efectos dañinos del actuar de los agentes del Estado.

Otras acciones se encaminan a otorgar certeza a situaciones jurídicas, a interpretar normas y actuaciones, para concluir en un contencioso de represión y ejecución, según sea el caso, además de las eventuales medidas precautorias y cautelares que es posible disponer en un procedimiento concreto, incluso en amparo de intereses o derechos.

Toda esta evolución ha derivado en una regulación ampliamente comprensiva y no excluyente, en que su desarrollo



ha estado marcado por el contencioso de nulidad, de responsabilidad, de interpretación y de represión.

Séptimo: Que, desde un prisma histórico, la responsabilidad patrimonial del Estado emergió con distintos caracteres en el derecho continental, especialmente en Francia (1855) y en España (1869). El cambio se produjo por vía jurisprudencial, no legal, salvo en materias específicas en las que medió determinación legislativa.

Es así como, el 6 de diciembre de 1855, el Consejo de Estado francés pronunció una sentencia con motivo del caso Rothschild. En ella expresó que las relaciones, derechos y obligaciones que emergen entre los agentes de la Administración y los particulares que aprovechan sus servicios *"no pueden estar regidos según los principios y disposiciones del derecho civil, que son de particular a particular; que, en especial, en lo que toca a la responsabilidad del Estado en caso de falta, de negligencia o de error cometidos por un agente de la administración, esta responsabilidad no es ni general, ni absoluta, sino que se modifica siguiendo la naturaleza y las necesidades de cada servicio"*, principio que se reiteró en la sentencia del caso Blanco, de 8 de febrero de 1873, en que se pretendió declarar responsable al Estado conforme a la legislación civil, argumentando que el Consejo de Estado entrega la competencia a las autoridades administrativas *"considerando que la responsabilidad que puede incumbir al Estado, por los daños causados por los hechos de las personas que él emplea en el Servicio Público, no puede estar regida por los principios que están establecidos en el Código Civil, para las*



relaciones de particular a particular; que esta responsabilidad no es ni general ni absoluta, sino que tiene sus reglas especiales que varían siguiendo las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados".

Incluso, algunos autores remontan la separación de los sistemas de responsabilidad y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado al 18 de febrero de 1800, con motivo de la dictación de la ley francesa que normó a la Administración con un carácter jurídico, externo, obligatorio y permanente (Máximo Severo Giannini, citado por Rolando Pantoja Bauzá, *El Derecho Administrativo*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, página 13). Si bien esta competencia especial se restringió a ciertos daños en un comienzo, a partir de la sentencia dictada en el caso Tommaso Greco de 1905 se extendió a toda clase de detrimento, "siempre que sean ciertos, aunque se trate de daños futuros o, incluso, morales, si éstos son avaluables en dinero, caso Dame Durand de 1949: perjuicio estético; caso Morell de 1942: sufrimientos físicos excepcionales; caso Bondurand de 1954: pérdida de un padre, madre o hijo, etc., todo ello bajo fórmulas genéricas de 'perturbaciones graves de las condiciones de existencia', con tal de que esos daños sean imputables a la Administración en cuanto producidos por personas situadas bajo su autoridad o por cosas colocadas bajo su guarda y de que entre la actividad del ente público imputable y el perjuicio cuya reparación se solicita exista un nexo causal directo ... y no roto por una causa extraña, incluyendo expresamente los daños provocados por las fuerzas



de policía, desde el caso *Lecomte et Daramy de 1949*" (Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo, Tomo II*, Editorial Civitas, Navarra, páginas 365 y 366).

En síntesis, la falta de servicio constituye una creación eminentemente jurisprudencial proveniente del derecho continental europeo, que, incluso a falta de ley, logró poner término a la imposibilidad de perseguir la responsabilidad del Estado por el daño causado por sus agentes a particulares, en virtud de axiomas superiores.

Octavo: Que, en nuestro país, el reconocimiento y la evolución del Derecho Público, y en especial el Derecho Administrativo, se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial. Respecto de la evolución jurisprudencial, se observa que ciertas sentencias descansan en la aplicación de la legislación de derecho civil, mientras que, en otros fallos, se invocan principios de derecho público. La doctrina cita como los primeros fallos en que se sustenta la decisión en principios de derecho público los dictados en los antecedentes caratulados "*Sociedad Fuschs y Plath con Fisco*", y "*Lapostol con Fisco*", siendo dable reconocer que el caso "*Mario Granja con Fisco*", de 1938, marcó una regresión que duró medio siglo.

Sin embargo, fue en la sentencia dictada en "*Hexagon con Fisco*", el 28 de julio de 1987, cuando expresamente se declaró inaplicables las disposiciones del Código Civil para decidir la demanda dirigida contra el Estado de Chile, resolviendo el caso sobre la base de normas constitucionales y legales diversas al Código Civil. Aquí fue desestimada la



infracción al artículo 2332 del citado Código, al no darle aplicación, e igualmente las referidas a las Actas Constitucionales N° 2 y 3, la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional N°18.575, en que radica el origen de la responsabilidad del Fisco. Razonó en idéntico sentido la sentencia que rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco, en los autos caratulados "*Mireya Baltra Moreno con Fisco*", de 12 de agosto de 1998, que expresó en su considerando sexto: "*Que, en consecuencia, la sentencia ha dado aplicación lisa y llana a las normas del derecho común, sin reparar que la naturaleza de los vicios que afectan a los decretos impugnados hacen improcedente estimar que puedan sanearse por el transcurso del tiempo, especialmente si se considera que la disposición constitucional en cuya virtud se ha declarado la nulidad no contiene remisión expresa alguna que permita aplicar las reglas de prescripción que el fallo invoca; y la naturaleza de la nulidad que se ha declarado impide integrar o complementar la norma constitucional con preceptos comunes, ya que el texto de la primera excluye toda posibilidad de saneamiento desde que dispone que los actos que la infringen son nulos per se, sin necesidad de declaración alguna, impidiendo así que la voluntad de las partes o el transcurso del tiempo puedan convalidarlos*".

En lo sustancial, la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a un estado, pacífico en la actualidad, que reconoce la responsabilidad del Estado, exigiendo, en la mayoría de los casos, un factor de imputación que se hace descansar en la noción de "falta de servicio", figura que



incluye la actividad jurídica ilegal del aparato estatal, su mala organización, el funcionamiento defectuoso, y las omisiones o silencios cuando debió actuar, siempre que de ello se derive daño en los particulares.

Noveno: Que, ahora bien, en el orden normativo, la creación jurisprudencial de origen francés que se viene estudiando fue recogida, en 1986, en el entonces artículo 44 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -hoy su artículo 42- bajo el siguiente tenor: *"Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio"*. Años más tarde, específicamente en 2002, tal criterio de imputación fue introducido a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo artículo 152 indica: *"Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio"*. Finalmente, en septiembre de 2004 fue publicada la Ley N° 19.966 que establece un Régimen de Garantías en Salud, que menciona, en el inciso primero de su artículo 38, que *"Los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio"*, para agregar, en el inciso siguiente, que *"El particular deberá acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha falta de servicio"*. Idéntica idea se repite en el artículo 42 del mismo cuerpo normativo, que expresa: *"El Fondo Nacional de Salud será responsable por falta de servicio y las Instituciones de Salud Previsional por incumplimiento negligente, de su obligación de asegurar el*



otorgamiento de las garantías explícitas de salud contempladas en esta ley, siempre que tal incumplimiento sea consecuencia directa de su actuar”.

Décimo: Que los preceptos transcritos en el motivo anterior constituyen una consagración de rango legal de una máxima constitucional esencial: Chile es una República Democrática de Derecho. Esta declaración, junto a la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, a cuyo servicio se encuentra el Estado, el principio de participación, alternancia en el poder, legalidad, responsabilidad, transparencia y el establecimiento de un sistema de protección de derechos de las personas, entrega una conclusión de trascendencia fundamental: En nuestro país, como principio general, no hay inmunidad de jurisdicción; todas las autoridades, personas o grupos se encuentran sometidas a la Constitución y la ley, así como a las acciones de las autoridades establecidas por ellas, entre las que se encuentran los tribunales. Es por lo anterior que se puede afirmar que todas las autoridades, órganos y funciones del Estado se encuentran sujetas a responsabilidad por sus actos frente a la ciudadanía.

Undécimo: Que, vinculando las explicaciones precedentes con el caso específico que aquí se analiza, es posible concluir que, frente a una actuación desviada de un órgano jurisdiccional civil que causa daño a un particular, sólo existe una posible alternativa: El afectado puede perseguir la reparación de los perjuicios soportados, respecto del Estado de Chile, invocando como título de imputación la falta de servicio.



Duodécimo: Que, en efecto, si bien a la controversia no resulta literalmente aplicable lo previsto en el artículo 38 de la Carta Fundamental, así como tampoco la Ley N° 18.575, en su integridad, por restringirse, ambas preceptivas, a los órganos de la Administración del Estado, surge que, ante el deber constitucional de reparación al que se ha hecho referencia se torna indispensable acudir a la falta de servicio, aún sin norma expresa que lo ordene, por tratarse de una noción transversal en materia de responsabilidad del Estado que, atendida su recepción jurisprudencial y las diversas consagraciones normativas que se han mencionado, se ha erigido, en la actualidad, como un verdadero principio informador sobre la materia.

Décimo Tercero: Que no obsta a la conclusión anterior la existencia del régimen de responsabilidad del Estado frente a decisiones judiciales injustificadamente erróneas o arbitrarias de orden criminal, estatuido en el literal i) del numeral 7° del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que, en tanto regla especial, no es apta para suprimir el deber de general de reparación que, como fue dicho, emana de las bases de la institucionalidad de la República.

Décimo Cuarto: Que, finalmente, es preciso descartar la posibilidad de acudir a las reglas comunes sobre responsabilidad extracontractual contenidas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, primeramente, por tratarse de un estatuto destinado a un fin específico: Asignar consecuencias jurídicas frente a delitos y cuasidelitos civiles, fuentes no compartidas por el régimen de responsabilidad del Estado por falta de servicio, que se



encuentra llamado a operar ante el incumplimiento, o el cumplimiento tardío o imperfecto de obligaciones de origen legal.

Por otro lado, pretender aplicar las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común, supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, por cuanto, sin desconocer la innegable importancia del Código de Bello para todo el Derecho, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, realidad que el mismo Código reconoce, al estipular, en su artículo 4°, que las disposiciones especiales *"se aplicarán con preferencia a las de este Código"*, como ocurre, precisamente, con derechos de fisonomía propia como el laboral. De esta forma, el Código Civil es supletorio a todo el Derecho Privado, al que orienta. Pero no debe olvidarse que, si bien el fenómeno de la codificación se planteó para construir un sistema integral, estructurado y coordinado de la legislación, la descodificación se ha transformado en la manera empleada por el legislador para adoptar, de manera dinámica, la forma en que adecua a las nuevas realidades situaciones emergentes que no se encuentran en el sistema existente, atendidas sus principios, finalidades y valores propios.

De esta forma, los principios y normas especiales han emergido en relación con el Derecho Público en general, y el Administrativo en particular, como una descodificación material, pues responde a postulados diversos y, en no pocas ocasiones, entran en pugna con los del derecho privado, que



regula las relaciones desde un plano de igualdad, con plena autonomía de las personas para obligarse. En contraposición, esta rama emergente, definida y representativa de la supremacía de la finalidad de servicio público, se aparta de aquellos postulados de autonomía de la voluntad e igualdad entre partes.

Décimo Quinto: Que, resuelto como ha sido que a las acciones u omisiones de los Tribunales de Justicia les resulta aplicable el régimen de responsabilidad por falta de servicio, es de la esencia recordar que esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que tal figura se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del órgano en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando, así, como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria.

Décimo Sexto: Que, como se adelantó, en la demanda se ha hecho consistir la falta de servicio en la errada certificación de no oposición de excepciones, practicada por el Secretario del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago en el juicio hipotecario iniciado en contra del actor bajo el Rol N° 2.426-2000, yerro que derivó en la subasta del inmueble objeto de la caución, pese a que la deuda, a la fecha del requerimiento, se encontraba íntegramente pagada, modo de extinguir que había sido oportunamente esgrimido por el ejecutado en la oposición presentada ante el tribunal antes de la certificación objeto de la controversia.



Décimo Séptimo: Que, entonces, para determinar si la conducta del órgano jurisdiccional constituye una deficiencia o mal funcionamiento calificable como falta de servicio, es menester detallar los siguientes acontecimientos relacionados con el juicio ejecutivo que se ha mencionado:

A. Por escrituras públicas de 30 de octubre de 1973, 7 de noviembre de 1974 y 7 de enero de 1975, otorgadas ante el Notario Público de Talca, don Sergio Mendoza Aylwin, la Asociación Ahorro y Préstamo del Centro, Ahorrocetro, antecesora del Banco Santander-Chile como acreedor, concedió un préstamo habitacional a don Wilibaldo Florián Acevedo Berrios.

B. El 17 de julio de 1981, aquel crédito fue repactado y liquidado, asumiendo, el actor, la obligación de pagar la suma de 294,89 Unidades de Fomento en 256 dividendos iguales, mensuales y sucesivos a partir de julio de 1981, dividendos que comprenderían un 8% de interés anual y la amortización respectiva.

C. El 9 de septiembre de 1983, la acreencia anterior fue nuevamente repactada, agregándose 55 nuevos dividendos mensuales de 2,865913 Unidades de Fomento cada uno, a partir del término de la obligación original, en noviembre de 2002. En esta oportunidad, para garantizar todas las obligaciones contraídas con la acreedora, el deudor constituyó hipoteca sobre sus derechos en el inmueble correspondiente a la propiedad ubicada en calle 8 Sur,



entre 18 y 19 Oriente, sin número, de la ciudad de Talca.

D.El 02 de mayo de 1989, el actor reconoció estar en mora de 58 dividendos correspondientes al mutuo original, cuyo monto total calculado a la fecha indicada ascendía a 150,581679 Unidades de Fomento, parcialidades que el Sr. Acevedo Berrios se comprometió a pagar en 58 nuevos dividendos mensuales de 2,596236 Unidades de Fomento, a partir del término de la obligación ya repactada, en octubre de 2007, estableciéndose que permanecerían plenamente vigentes todas las condiciones, plazos y modos señalados en las escrituras de mutuo correspondientes, así como las garantías personales y reales que se hubieren otorgado para dichos efectos.

E.El 12 de junio de 2000, el Banco Santander-Chile presentó demanda en juicio ejecutivo especial hipotecario, argumentando que el demandante no había pagado los dividendos devengados a partir de enero de 1999 hasta la fecha de interposición de la demanda, por lo que, según la liquidación practicada a abril de 2000, adeudaba por concepto de capital e intereses 400,165 Unidades de Fomento. Se dio inició, así, a la causa Rol N° 2.426-2000, de ingreso ante el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago.

F.El 27 de marzo de 2022, se notificó la demanda al ejecutado.

G.El 17 de abril de 2002, se certificó que no constaba la consignación de fondos para el pago de la



deuda, y que el plazo para hacerlo se encontraba vencido.

H.El 13 de mayo de 2002, a petición del ejecutante, el tribunal decretó el remate del inmueble hipotecado.

I.El 18 de mayo de 2002, el actor compareció ante el tribunal y opuso la excepción contenida en el artículo 103, numeral 1° de la Ley General de Bancos, esto es el pago de la deuda.

J.El 13 de junio de 2002, el tribunal confirió traslado de la excepción reseñada en el literal precedente.

K.El 19 de junio de 2002, el banco ejecutante solicitó al tribunal tener presente las consideraciones que indicó en su escrito, en contra de la excepción de pago.

L.El 1 de julio de 2002, el banco ejecutante solicitó al tribunal resolver la excepción de pago.

M.El 26 de abril de 2004, el banco ejecutante solicitó al tribunal que se certificara la no oposición de excepciones y el vencimiento del plazo para hacerlo.

N.El 26 de abril de 2004, el Secretario del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago certificó: *"Que el demandado no ha opuesto excepciones dentro del plazo legal que se encuentra vencido"*.

O.El 2 de agosto de 2004, se efectuó la subasta pública del inmueble hipotecado, bien que resultó adjudicado al banco ejecutante en \$7.700.000, con



cargo a su crédito, suma equivalente a 450,472 Unidades de Fomento de la época.

P.El 29 de marzo de 2005, el ejecutado dedujo incidente de nulidad del remate, aduciendo, precisamente, la interposición de la excepción de pago, no resuelta antes de la certificación.

Q.El 9 de mayo de 2011, el tribunal rechazó dicho incidente de nulidad, expresando que el pago invocado por el ejecutado era insuficiente para cubrir el total de la deuda.

R.El 30 de diciembre de 2011, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución anterior, acogió el incidente de nulidad, y retrotrajo el procedimiento al estado de emitirse pronunciamiento sobre la excepción de pago.

S.El 9 de octubre de 2012, el tribunal de primera instancia rechazó la solicitud del ejecutado en orden a cancelar la inscripción de la adjudicación a nombre del banco, argumentando que el inmueble había sido enajenado a un tercero, y que dichas actuaciones y contratos resultaban ajenas al procedimiento que se ordenó retrotraer.

T.El 18 de junio de 2013, conociendo el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución detallada en el literal precedente.

U.El 29 de agosto de 2013, el tribunal de primer grado acogió, con costas, la excepción de pago que había sido opuesta por el ejecutado en mayo de 2002,



constatando que, a la época del requerimiento de pago, el ejecutado se encontraba al día en el pago de las cuotas del mutuo que se cobraba.

Décimo Octavo: Que, cumplido lo anterior, resta identificar la normativa que establece el parámetro de conducta que debía seguir el Secretario del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, funcionario a quien el actor le atribuye el yerro constitutivo de falta de servicio.

En este sentido, el inciso 1° del artículo 379 del Código Orgánico de Tribunales expresa: *"Los secretarios de las Cortes y juzgados, son ministros de fe pública encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades, y de custodiar los procesos y todos los documentos y papeles que sean presentados a la Corte o juzgado en que cada uno de ellos debe prestar sus servicios"*.

A su turno, el inciso final del artículo 103 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 1997 Ley General de Bancos, prescribe: *"Si no se formulare oposición, o se hubiere desechado la formulada, se procederá al remate del inmueble hipotecado o a su entrega en prenda pretoria al banco acreedor, según corresponda"*.

Luego, el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, en su texto vigente a la época del hecho objeto del reproche formulado en la demanda, indicaba: *"Se formará el proceso con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio."*

Ninguna pieza del proceso podrá retirarse sin que previamente lo decrete el tribunal que conoce de la causa".



En el mismo sentido, en el artículo 35 del mismo cuerpo normativo se leía: *"Todas las piezas que deben formar el proceso, en conformidad al artículo 29, se irán agregando sucesivamente según el orden de su presentación. Al tiempo de agregarlas, el secretario numerará cada foja en cifras y en letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del proceso"*.

Finalmente, su artículo 36 decía: *"El proceso se mantendrá en la oficina del secretario bajo su custodia y responsabilidad. Los autos no podrán retirarse de la secretaría sino por las personas y en los casos expresamente contemplados en la ley. Corresponderá al secretario velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 393 del Código Orgánico de Tribunales"*.

Décimo Noveno: Que, como se puede apreciar, una primera consideración atingente a la resolución de la contienda en análisis consiste en verificar que la correcta formación del expediente, en todo proceso civil, es una obligación que la ley impone al Secretario del juzgado respectivo. En este punto, de la atenta revisión de las compulsas remitidas a esta Corte aparece que dicha exigencia fue cabalmente cumplida, por cuanto todos los escritos, resoluciones y actuaciones mencionadas en el considerando décimo séptimo precedente fueron correctamente agregadas en orden consecutivo.

Vigésimo: Que, ahora bien, en directa relación con el hecho constitutivo de falta de servicio esgrimido por el actor, surge una segunda obligación cuyo cumplimiento la ley



pone de cargo del Secretario de todo tribunal civil, cual es actuar como ministro de fe, calidad que exige de su parte que, cuando le sea ordenado por el juez de la causa, estampe en el proceso la efectividad de un determinado estado o actividad procesal.

Vigésimo Primero: Que, como surge de lo que se viene diciendo, en el caso concreto tal obligación fue abiertamente incumplida, por cuanto la certificación transcrita en el literal "N" del considerando décimo séptimo precedente resulta incompatible y contradictoria con los escritos, actuaciones y resoluciones reseñadas en los literales "I", "J", "K" y "M", desatendiendo el mérito del proceso al dar fe, erróneamente, de la inexistencia de la excepción de pago que había sido previamente opuesta y tramitada, pero no resuelta.

Vigésimo Segundo: Que, tal yerro se erigió, en la práctica, en un antecedente necesario del remate del bien hipotecado, por cuanto, como se dijo, el inciso final del artículo 103 de la Ley General de Bancos requiere, para la realización de la subasta, que no se formule oposición o que ésta sea desechada, hipótesis, la primera, que fue atestada de manera afirmativa por el funcionario auxiliar, habilitando al juez de la causa para continuar con la ejecución.

Vigésimo Tercero: Que, por lo explicado, y tal como lo propone el actor, el incumplimiento de la obligación legal reseñada importa una actuación imperfecta de un órgano de la administración de justicia, constitutiva de falta de servicio, desviación que derivó en una consecuencia negativa para el interés del demandante al resultar subastado un



inmueble producto de la ejecución de una obligación dineraria que se encontraba extinguida por pago.

Vigésimo Cuarto: Que, sin perjuicio de lo concluido, no resulta atendible acceder a todos los conceptos desglosados en el libelo y calificados como daño por el actor.

En efecto, respecto de la merma patrimonial, no se ha logrado satisfacer mínimamente la carga probatoria sobre su existencia, deber que la ley pone de cargo de quien la alega. Tal es así, que, habiéndose solicitado el resarcimiento del valor comercial del inmueble despojado al ejecutado, no se ha rendido prueba alguna que dé cuenta de su valor. Lo mismo ocurre con los honorarios y "otros pagos" que dice haber solventado el demandante, y con las rentas de arrendamiento que pudo haber pagado, máxime si se considera que, de concurrir, esta última circunstancia exige acreditar que el bien subastado servía de residencia para el ejecutado al momento del remate, hecho que se mantiene en la incertidumbre.

No ocurre lo mismo con el daño moral que se ha esgrimido, por cuanto el actor acompañó al proceso el certificado suscrito por don Nelson Martínez Cancino, psicólogo, quien diagnosticó, respecto de don Wilibaldo Florián Acevedo Berrios, *"síntomatología asociada a un trastorno de ansiedad y a un trastorno de ánimo, específicamente depresión severa no tratada (de antigua data, producto de estresores psicosociales y ambientales), sin síntomas psicóticos... por lo que necesita tratamiento psiquiátrico y farmacológico urgente, como también tratamiento psicoterapéutico de manera simultánea"*,



consecuencias clínicas que son perfectamente compatibles con la pérdida de un inmueble dado en garantía de una obligación extinguida por pago, en el marco de un procedimiento judicial que se extendió por más de 13 años y que culminó con un resultado incompatible con el derecho subjetivo que asistía a cada parte.

Vigésimo Quinto: Que la falta de servicio que se ha tenido por establecida en el motivo vigésimo tercero precedente constituye la causa del perjuicio determinado en el considerando anterior, en la medida que, como se explicó, la errónea certificación constituyó el antecedente necesario del remate que originó la consecuencia lesiva.

Es este aspecto, cabe dejar constancia, en primer lugar, que, habiendo mediando una evidente contribución del banco ejecutante al resultado dañoso -al solicitar la certificación, gestionar el remate, concurrir a él y adjudicarse el inmueble hipotecado, a sabiendas de la existencia y pendencia de la excepción de pago oportunamente opuesta-, ello no obsta a la responsabilidad fiscal por falta de servicio, en la medida que es al órgano jurisdiccional estatal, y no a las partes, a quien la ley le impone la obligación incumplida, sin perjuicio de la transgresión del principio de buena fe procesal por parte de un litigante que, en cualquier caso, no figura como demandado en este procedimiento indemnizatorio.

En segundo orden, la pasividad que la defensa fiscal reprocha al ejecutado -quien no habría agotado los medios procesales a su alcance para corregir la desviación del juicio ejecutivo a partir de la errada certificación de no



oposición de excepciones- en caso alguno desvirtúa relación causal, ni puede ser entendido como un incumplimiento del deber de mitigación del daño, en la medida que todas aquellas herramientas intra proceso constituyen derechos, o a lo sumo cargas, que no justifican que un juicio que debió culminar con el rechazo de la demanda ejecutiva por el pago de la deuda, terminase con el remate del inmueble que caucionaba una obligación previamente extinguida por pago.

Vigésimo Sexto: Que, finalmente, a la hora de determinar el monto de la indemnización a ser pagada en favor del demandante, esta Corte Suprema tomará en consideración ciertos factores objetivos útiles para apreciar la magnitud de la afectación extrapatrimonial, consistentes en: (i) La irreversibilidad de las consecuencias dañosas derivadas del hecho constitutivo de falta de servicio; (ii) La entidad del interés patrimonial comprometido con el error; y, (iii) La prolongación de la incertidumbre en que se vio sumido el actor durante más de una década, lapso que tardó el tribunal en resolver -y acoger- la excepción de pago promovida por el ejecutado; elementos que, en su conjunto, permiten concluir que el justo resarcimiento del daño causado al actor equivale a \$80.000.000.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 144 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que se **revoca** la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, y en su lugar se declara que **se acoge** la demanda intentada en el folio N° 1 del expediente electrónico, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a



pagar en favor de don Wilibaldo Florián Acevedo Berrios, a título de indemnización por daño moral, la suma de \$80.000.000 (ochenta millones de pesos), monto que deberá pagarse reajustado de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y la de su pago efectivo, y los intereses corrientes para operaciones no reajustables que se devenguen por el mismo periodo.

No se condena en costas a la parte demandada por no haber resultado totalmente vencida.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Carroza.

Rol N° 5.334-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Águila Y. No firman los Ministros Sra. Vivanco y Sr. Carroza, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos haciendo uso de su feriado legal. Santiago, 4 de abril de 2023.

SERGIO MANUEL MUÑOZ GAJARDO
MINISTRO
Fecha: 04/04/2023 16:58:19

ADELITA INES RAVANALES
ARRIAGADA
MINISTRA
Fecha: 04/04/2023 16:58:20

PEDRO HERNAN AGUILA YAÑEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/04/2023 16:58:20



En Santiago, a cuatro de abril de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

